

# MÁRGENES Y COSTES

JULIÁN SANTAMARÍA OSSORIO – LA VANGUARDIA – 13/11/2005

El curso político se abrió a comienzos del otoño con el debate sobre el nuevo Estatuto de Catalunya. Ocupó primero a las fuerzas políticas catalanas y luego a todas las demás. Ese debate abría la gran oportunidad de buscar de común acuerdo la forma de conjugar la singularidad de Catalunya con la unidad de España encajando un problema histórico que no cabe ignorar ni exagerar sin grandes riesgos para todos y que recaba por eso la voluntad de negociar y pactar entre todos una fórmula aceptable por todos.

El Parlament alcanzó un acuerdo en tiempo de descuento sobre un texto problemático. Por eso tenía sentido analizar con serenidad, una vez sedimentadas las impresiones generadas por el debate en el Congreso, su impacto en la vida política española y catalana, sus implicaciones electorales y sus consecuencias cara a la futura negociación del texto en el Congreso de los Diputados. Los datos de nuestro estudio son sumamente elocuentes en relación con todos y cada uno de esos puntos.

Lo primero que llama la atención es el alto grado de enrarecimiento que ha experimentado en estos últimos meses la atmósfera política española. La buena percepción de la situación económica no se acompaña de una evaluación semejante de la situación política, que es hoy muy negativa. Cuando se produce esa discordancia es casi siempre porque los ciudadanos aprecian que existe una tensión desproporcionada entre los actores políticos. Y eso tiene siempre una doble consecuencia: de un lado, el deterioro espectacular de la imagen de los partidos, de todos los partidos, de la confianza que inspiran los principales líderes políticos, de la gestión del gobierno y la de la oposición; de otro, la polarización de los ciudadanos en torno a posiciones difícilmente reconciliables que les induce a censurar y rechazar de forma radical las posiciones del otro, con lo que el cuadro resultante es malo para todos.

En este caso no sólo se vislumbra esa división entre las percepciones de unos electorados y otros, sino también entre las que predominan en el conjunto de España y en Catalunya. Así, mientras en ésta ocho de cada diez entrevistados piensan que la propuesta del nuevo Estatut debe debatirse en el Congreso, en aquella la opinión, aun siendo favorable, está muy dividida. Lo mismo sucede con los juicios sobre el debate del 2-N. Zapatero lo ganó, a juicio de todos, por la mínima en España, por goleada en Catalunya. Hay más españoles en sintonía con el proyecto de España que defendió Zapatero que con el defendió Rajoy, pero en Catalunya la ventaja para el primero es de cinco a uno. Y visto desde otra perspectiva, los electorados de todos los partidos coinciden en ese punto, salvo el PP, donde ocho de cada diez se identifican más con el de Rajoy.

A pesar de esas y otras muchas discrepancias, los datos de este estudio sugieren que existe un amplio margen de maniobra para la negociación de la propuesta en el Congreso. En primer lugar, cuatro de cada diez catalanes, en su mayoría votantes de CiU y ERC, consideran que el Congreso debe respetar en lo esencial el texto, pero casi la mitad de todos los entrevistados, en Catalunya y fuera de ella, entienden, por el contrario, que el Congreso deberá introducir cambios importantes para que el Estatut sea aceptable por todos. Y, lo que es más importante, un 55% de los españoles, incluidos cuatro de diez votantes del PP, anticipa que el Estatut se aprobará con importantes cambios. Esas expectativas se elevan a un 67% entre los catalanes y son compartidas en Catalunya por siete de cada diez votantes de CiU y de ERC. Corresponde, pues, a los dirigentes políticos buscar las formas de entendimiento que permitan satisfacer esas expectativas.

Es verdad que subsisten divergencias notables en torno a la definición de Catalunya como nación, sobre el grado de solidaridad que comporta el modelo de financiación y sobre las consecuencias que pueda tener el Estatut para la unidad de España. A la mitad de los españoles les disgusta lo primero, temen que el modelo de financiación reduzca la solidaridad y que el Estatut ponga en cuestión la unidad de España. Esas actitudes, características del electorado popular, encuentran eco en algunos segmentos del PSOE e IU. Los catalanes no

comparten estos temores ni hacen del término nación una cuestión de principio. De hecho, pesan más los indiferentes (42%) que los partidarios (38%), junto a una minoría a la que le molesta (18%) la introducción del término nación. Hay, por tanto, espacio para el debate siempre que exista la voluntad de acuerdo.

Sin duda, el PP es el único partido que ha mostrado hasta ahora una mayor resistencia a negociar y no ha disipado las dudas acerca de si participará o no en las negociaciones que tengan lugar en el Congreso. Dos de cada tres españoles, casi la mitad de su electorado, y nueve de cada diez catalanes consideran que, a partir de aquí, el PP debería sumarse a la negociación, lo que es comprensible si se tiene en cuenta que tres cuartas partes del total entienden que una ley de esta naturaleza debe aprobarse por consenso. El consenso requiere una clara disposición a negociar y, por tanto, a ceder si es necesario. No se puede invocar de forma permanente y a la vez hacerlo imposible. Cuando la interlocución ha de tener lugar entre los representantes del Parlament y del Congreso, ninguno puede quedar excluido si no es por voluntad propia.

Algunos prestigiosos analistas dan por hecho que la actitud de los partidos ante la propuesta catalana vendrá dictada por sus intereses electorales a corto plazo. Puede que tengan razón. De momento, en el plano autonómico el acuerdo del Parlament no ha modificado el escenario electoral catalán, que se muestra estable con algunas ligeras fluctuaciones, imputables tanto a lo reducido de la muestra como a factores coyunturales ajenos al asunto, lo que sugiere que la estrategia del consenso no perjudica a ninguno de sus protagonistas. A nivel estatal, en cambio, el PP parece haber encontrado en la estrategia contraria beneficios sustanciales. Por vez primera desde marzo del 2004 se sitúa ligeramente por delante del PSOE. Nada sorprendente porque, frente a la falta de pedagogía del Gobierno y del partido que lo sostiene, el PP ha sabido articular una serie de mensajes muy sencillos y, por eso, muy eficaces que han servido para reagrupar casi a la totalidad de sus seguidores y atraer a una parte de los votantes del PSOE.

El debate sobre el Estatut no puede estar dominado por los cálculos a corto plazo. Se quiera o no, se trata de encauzar un problema histórico que no cabe negar. Y la prueba está en que sin su existencia probablemente no existiría hoy

el Estado de las Autonomías. Requiere un acuerdo entre todos, como reclama la ciudadanía. Hay margen para alcanzarlo si los partidos aceptan que en casos como éste la cooperación es, a medio plazo, más beneficiosa para todos y para el sistema que la persecución del rédito electoral, y que si el derecho a la diferencia no justifica el privilegio, la igualdad no es compatible con la uniformidad. No es fácil que se repita en el futuro inmediato una oportunidad tan equilibrada como ésta. ¿Tiene alguien especial interés en dejarla pasar?

**JULIÁN SANTAMARÍA OSSORIO**

Catedrático de Ciencia Política de la UCM y presidente de Noxa Consulting